

Las organizaciones obreras en el 18 de Julio. ¿Por qué no se adelantaron los partidos y sindicatos proletarios a la sublevación militar?

Fernando Claudín.

Publicado en Tiempo de Historia nº 20 de julio de 1976

Con la sublevación militar-fascista del 18 de julio se inicia la prueba decisiva entre la revolución y la contrarrevolución. Aunque tuvo a su favor la iniciativa, la elección del momento, la ventaja de obedecer a un plan y estar dirigida por un estado mayor central, y aunque logró arrastrar al grueso de las fuerzas armadas, la insurrección contrarrevolucionaria fue derrotada en la mayor parte del país, sobre todo en las regiones económica y demográficamente decisivas, por el contraataque de las fuerzas populares, pese a actuar en orden disperso, sin plan y sin dirección coordinadora a escala nacional, y en la mayor parte de los casos ni siquiera local; pese a carecer casi totalmente de preparación militar y de armas; y pese, también, a que el armazón civil del estado republicano se derrumbó como castillo de naipes, contribuyendo no poco a los escasos éxitos de los sublevados el comportamiento pasivo, vacilante, cuando no francamente capitulador —salvo honrosas excepciones— de las autoridades legales y de la generalidad de los dirigentes republicanos burgueses. Los partidos y organizaciones obreras fueron, sin duda, los artífices de la epopeya popular, pero pudieron serlo gracias a que se apoyaban en el irresistible impulso espontáneo de las masas proletarias de la ciudad y del campo, nacido de la conciencia política revolucionaria formada en los cinco años precedentes de grandes y aleccionadoras luchas, de forcejeo entre la revolución y la contrarrevolución.

Este resultado inicial refleja hasta qué punto en ese momento y en los meses precedentes la correlación global de fuerzas era favorable al pueblo revolucionario, e induce a plantearse la siguiente cuestión: ¿por qué no se adelantaron los partidos y sindicatos obreros a la sublevación militar, cuya preparación era un secreto de Polichinela?, ¿por qué no actuaron de manera concertada y decidida para aplastarla en embrión e impulsar resueltamente el proceso revolucionario? Una rápida ojeada a las posiciones políticas fundamentales de las tres principales corrientes del movimiento obrero en ese período permite, si no un esclarecimiento completo del problema, discernir, al menos, las razones esenciales.

SOCIALISTAS Y ANARCOSINDICALISTAS

En el partido socialista y en la UGT, los reformistas eran entonces muy minoritarios, aunque conservaban la dirección del partido gracias al hábil manejo del aparato. Bajo la jefatura de Indalecio Prieto propugnaban volver a la colaboración gubernamental con los partidos republicanos burgueses para reeditar la política de 1931-1933, es decir, la política que había decepcionado a los trabajadores y facilitado la contraofensiva reaccionaria de 1934-1935 (el «bienio negro»). Pero la oposición de la mayoría de las organizaciones locales del partido les impidió poner en práctica esa opción.

La gran mayoría de los socialistas y ugetistas —la UGT llega en esos meses al millón y medio de afiliados— se agrupaba en la izquierda, reconociendo como líder a Largo Caballero. Esta izquierda caballerista propugnaba la instauración de la «dictadura del proletariado», entendiendo por ella la conquista del poder por la clase obrera bajo la dirección del partido socialista; propugnaba la unificación de la UGT y la CNT, y se declaraba favorable también a la unificación con los comunistas en un sólo partido marxista. Eran posiciones que reflejaban la radicalización revolucionaria de aquella gran parte del proletariado industrial y agrícola agrupada bajo las viejas banderas del socialismo español; su voluntad resuelta de acabar de una vez con el régimen de los capitalistas y terratenientes. Pero el caballerismo era débil en la elaboración estratégica y táctica; carecía de una política clara de alianzas,

objetivos, métodos de acción, etc. Esperaba que el desgaste y el fracaso del gobierno republicano haría caer al estado en sus manos como una fruta madura. Y al mismo tiempo subestimaba la amenaza representada por el complot contrarrevolucionario.

La gran corriente anarcosindicalista, organizada en la CNT y la FAI, agrupaba entonces a otra parte considerable del proletariado industrial y agrícola, y se encontraba en análoga disposición revolucionaria, si no más extrema aún. Pero sus concepciones ideológicas hacían muy difícil que pudiera concertarse con los partidos marxistas, ni siquiera con los sindicatos de inspiración marxista como eran los ugetistas. Las repetidas represiones sufridas bajo los gobiernos republicanos con participación socialista habían exacerbado la desconfianza de los trabajadores cenetistas no sólo hacia los partidos políticos, en general, sino hacia los partidos obreros, en particular. Por otra parte, la evolución sufrida por el régimen soviético —en especial la persecución del anarquismo, la reducción de los sindicatos a apéndice burocrático del estado, etc.— había borrado el extraordinario impacto que la revolución de Octubre tuvo inicialmente en el proletariado anarcosindicalista español y acentuado en él las concepciones apolíticas y antiestatales. La idea de un estado de dictadura del proletariado inspiraba a los anarcosindicalistas casi el mismo horror que el estado burgués. Y respecto a este último no hacían gran distingo entre que revistiera la forma democrática o la forma fascista. Lo que les llevaba —aunque por razones diferentes a las de los caballeristas— a subestimar la amenaza fascista. No obstante, la experiencia de los fracasos sufridos en sus anteriores intentonas revolucionarias y la nueva orientación de la UGT determinaron que la CNT, en su congreso de mayo de 1936, propusiera a la central sindical ugetista un «pacto revolucionario», a fin de «destruir completamente el régimen político y social que regula la vida del país», dejando la cuestión de cómo organizar el nuevo régimen a «la libre elección de los trabajadores reunidos libremente». Pero la CNT seguía oponiéndose a toda alianza con los partidos políticos obreros, lo cual hacía poco factible un pacto de ese alcance con la UGT dados los vínculos de ésta con el PS. Por lo demás, el anarcosindicalismo carecía totalmente de concepciones estratégicas y tácticas, cubriendo este vacío con el postulado de la «acción directa».

COMUNISTAS

En contraste con caballeristas y anarcosindicalistas, el partido comunista —que en esos meses crece rápidamente, tanto en número como en influencia— tenía una línea estratégica y táctica bien definida, elaborada fundamentalmente por la dirección de la Internacional Comunista, que resumiremos muy esquemáticamente. La revolución española iniciada con la caída de la dictadura primorriverista debía pasar —según la IC— por una etapa democrático-burguesa antes de entrar en la etapa socialista. Pero con la particularidad de que la primera etapa no podía realizarse bajo la dirección de la burguesía liberal, porque ésta hacía tiempo que había dejado de ser una fuerza revolucionaria (tesis que los acontecimientos confirmaron plenamente en el caso español, como en el caso ruso). Sólo el proletariado, aliado con el campesinado, podía ser capaz de dirigirla y llevarla hasta el fin (realización de la revolución agraria, transformación democrática- del estado, autonomías nacionales, etc.). Lo cual implicaba la dirección del partido comunista, puesto que sólo éste era el partido dirigente del proletariado, su auténtico representante. Durante los tres primeros años de la República, tal esquema estratégico fue aplicado con el extremado sectarismo táctico propio a la I. C. en el período 1928-1933. El viraje de 1934-35 hacia la política frentepopulista hizo posible las relaciones unitarias con socialistas y republicanos, que se concretizaron en la alianza para las elecciones de febrero de 1936, sobre la base de un programa electoral moderado que no iba más allá de los programas tradicionales del republicanismo pequeño burgués. No contenía soluciones para los problemas básicos de la etapa «democrático-burguesa» (en particular, la cuestión crucial de la tierra quedaba de nuevo en barbecho). El P. C. se comprometió a respetar escrupulosamente este compromiso, que además del programa indicado incluía que el gobierno encargado de aplicarlo estaría formado exclusivamente por los partidos republicanos burgueses y pequeño-burgueses. Así, la famosa etapa «democrático-burguesa» de la revolución quedaba subdividida --desde el punto de vista de la estrategia del P. C.— en dos subetapas. En la primera se aplicaría el programa de febrero, bajo la dirección del gobierno republicano burgués, con el apoyo del partido comunista, del socialista y de la UGT; en la segunda, el P. C. seguiría adelante con las fuerzas dispuestas a llevar hasta el fin la etapa democrático-burguesa. Sólo después de ese «fin» se podría pasar a la etapa socialista. En contraste con el simplismo de la «acción directa» anarcosindicalista y con la vaguedad o ambigüedad de la política caballerista, esta concepción estratégico-táctica del

P. C. parecía tener una coherencia que contribuyó no poco a la evolución hacia el partido comunista de una fracción del caballerismo (como el grupo dirigente de la Juventud Socialista). Pero el desarrollo de los acontecimientos a partir de la victoria electoral del frente popular, puso de manifiesto que esa política estaba en retraso respecto a la dinámica profunda y el carácter adquiridos por la revolución.

LA REVOLUCION PROLETARIA AL ORDEN DEL DIA

La revolución, en efecto, había recorrido un largo camino desde 1930-31. Se había producido una polarización extrema de las fuerzas sociales y políticas. Los núcleos principales de la burguesía formaban bloque, de hecho, con la aristocracia terrateniente, las castas militares y eclesiásticas, los grupos fascistas. Bloque heterogéneo no sólo por su composición social, sino por sus tendencias políticas, pero con un denominador común: el miedo a la revolución en marcha. Unido, pese a sus contradicciones, por la idea de que frente al avance revolucionario el único medio de salvar la Propiedad, el Orden, la Familia, la Religión, la Patria y demás «valores eternos», era la instauración de un poder fuerte, dictatorial y el instinto de clase. cuando no la percepción fría de la situación objetiva, no engañaba a esos grupos sociales, porque en realidad el proletariado industrial y agrario, las masas de campesinos pobres, habían pasado a posiciones clasistas radicalmente revolucionarias. Decepcionados hasta el tuétano de la república parlamentaria del 14 de abril y de sus políticos liberales, ya no confiaban más que en sus organizaciones clasistas y no creían en programas «mínimos», en medias tintas. Su programa «mínimo» era la revolución social. Con toda la confusión ideológica y política que se quiera, pero con una meta muy clara: expropiar cuanto antes a los capitalistas y terratenientes.

Si la socorrida imagen del volcán para caracterizar situaciones de crisis ha solido utilizarse con excesivo subjetivismo en muchas ocasiones, en la España de febrero de 1936 poseía una objetividad rigurosa. Y apenas conocida la victoria electoral el volcán comenzó a entrar en erupción, poniéndose en seguida de manifiesto la inconsistencia de la primera «subetapa» prevista en el plan estratégico de la I. C. Los partidos republicanos que forman el gobierno dan pruebas inmediatas, en efecto, de que no han aprendido nada. Su política se asemeja como un huevo a otro huevo a la del período 1931-1933. Quienes habían cambiado eran las masas obreras y populares, que sin esperar decisiones gubernamentales ponen en libertad a los presos políticos, desencadenan un impresionante movimiento huelguístico y grandes manifestaciones, exigiendo pan, trabajo, tierra, aplastamiento del fascismo y victoria total de la revolución, respondiendo golpe por golpe a las provocaciones fascistas. Comienzan las ocupaciones de tierras y de empresas cerradas por sus propietarios. Entre febrero y julio se crea, de hecho, un triple poder. El legal, cuya autoridad y efectividad son prácticamente nulos. El de los trabajadores, sus partidos y sindicatos, que se despliega a la luz del día en la forma descrita. Y el de la contrarrevolución, que aunque se exterioriza en los discursos agresivos de sus representantes parlamentarios, en el sabotaje económico y en las acciones de los grupos de choque fascistas, actúa sobre todo en el secreto de los cuartos de banderas preparando minuciosamente el golpe militar. El dilema real que se pone al orden del día no es instauración de una dictadura contrarrevolucionaria o consolidación de la república parlamentaria democrático-burguesa, sino dictadura contrarrevolucionaria o revolución proletaria (revolución popular encabezada por el proletariado), aunque sólo fuera por la simple razón de que la única fuerza capaz de impedir la dictadura contrarrevolucionaria no tenía la más mínima intención de delegar después su victoria en un tipo de república que ya había demostrado suficientemente su incapacidad para servir de cauce a las grandes transformaciones sociales que la realidad del país demandaba. (Esta era la diferencia radical de la situación española con la situación alemana pre-fascista, en la que la mayoría del proletariado estaba aún, ideológica y estructuralmente, integrado en la democracia burguesa, y en la que el proletariado industrial no contaba con aliados tan poderosos como el proletariado agrícola y el campesinado pobre de España.)

De acuerdo con su línea táctico-estratégica antes esbozada, el P. C. propugnaba la unidad sindical UGT-CNT, el reforzamiento de la unidad de acción con el partido socialista, preconizando también la unificación de ambos partidos en un sólo partido marxista-leninista. Sus planteamientos unitarios a to-dos los niveles constituían el lado fuerte de su política, porque respondían a una exigencia tan relevante de la situación objetiva como era la de hacer frente unitariamente a la amenaza de golpe contrarrevolucionario, cuya gravedad el partido comunista percibía, probablemente, con más claridad y sensibilidad que las otras formaciones políticas y sindicales. Pero, al mismo

tiempo, a esta política unitaria se le daba como objetivo la defensa y consolidación del régimen republicano parlamentario tal como existía, el objetivo de «presionar» al gobierno para que aplicara el programa del frente popular (un programa que —como hemos dicho— estaba muy en retraso respecto a los problemas planteados y a las exigencias de las masas) y para que tomara medidas preventivas contra la conspiración militar. Al plantear la urgencia de la acción unitaria sobre esta base, el P. C. encontraba la comprensión del ala minoritaria reformista del partido socialista, la reticencia, cuando no la impugnación abierta, del ala izquierda caballerista y, desde luego, el rechazo del anarcosindicalismo. Caballeristas y anarcosindicalistas incurrían, sin duda, en grave error y responsabilidad —siendo como eran las fuerzas aplastantemente mayoritarias de las masas populares— al no apreciar la magnitud de la amenaza fascista y no tomar la iniciativa de una acción resuelta y concertada, por encima de todas las divergencias doctrinales y tácticas, contra esa amenaza. Obnubilados, como estaban, por su enemiga a la república burguesa, no percibían que la conspiración militar no se dirigía tanto contra ella como contra la revolución proletaria en marcha. A su vez el P. C., al no plantear en primer plano este aspecto, que era el esencial, no contribuía a que caballeristas y anarcosindicalistas comprendiesen su error. Incluso obtenía el efecto contrario. La unidad que los partidos y sindicales no supieron realizar a tiempo para matar en germen el golpe contrarrevolucionario, cuajó en la respuesta a la sublevación militar, en el combate, y en esta acción se reveló abiertamente el verdadero carácter de la revolución en marcha: el régimen capitalista y terrateniente dejó prácticamente de existir en la zona republicana. Los medios de producción y el poder político pasaron, de hecho, a manos de las organizaciones obreras y campesinas. Otra cosa es lo que sucedió después, pero ése es otro tema. Digamos únicamente que las divergencias antes reseñadas fueron recobrando la primacía, acentuadas por la influencia de los factores internacionales —política de las «democracias» occidentales, política de Stalin, etc.— dividiendo gravemente a las fuerzas populares, sobre todo a partir de marzo de 1937, y siendo uno de los factores principales de la derrota final.

F. C.